Bases para la Alianza Constituyente de una Nueva Argentina*

Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero

AL PUEBLO DE LA NACIÓN ARGENTINA

La historia nacional argentina está signada por una intermitente guerra civil a veces encubierta y a veces violentamente desembozada. Este enfrentamiento aún inconcluso se inició en los albores mismos de la independencia en 1810; su persistencia a lo largo de ya más de 170 años a pesar de las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas acaecidas en el país, más aún, la continuidad de los mismos apellidos, como los Mitre, los Paz y los Martínez de Hoz, contra los mismos enemigos, como los montoneros; la reiteración de las mismas falsas opciones como civilización o barbarie, solo puede explicarse por la esencia misma de esta lucha ya casi bicentenaria. Se trata del enfrentamiento entre las fuerzas que pretenden el pseudo progreso del país a partir del capital imperialista venido desde el exterior, y las fuerzas que pretenden el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales expandiendo el mercado interno. Por eso es que con las abismales diferencias que separan a la formación social de hoy, de aquella de hace 170 años, los dos polos de este enfrentamiento aun inconcluso mantienen sus mismos nombres: pueblo y oligarquía.

El ocaso del imperialismo británico implica el agotamiento del país constituido a partir de 1853. Ya las insurrecciones radicales habían obligado a la concesión de la ley Sáenz Peña, lo que evidencio que el modelo económico liberal antinacional y antipopular no podían funcionar con el modelo liberal en lo político: Las mayorías populares ganaban cualquier elección votando una filosofía económica antagónica con la oligárquica. Pero fue el peronismo quien presenta seriamente un proyecto alternativo al plantearse la constitución de una Nueva Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Plasmó el nuevo proyecto nacional en una nueva Ley Fundamental con la reforma constitucional de 1949. La incorporación de la clase obrera y todos los sectores populares marginados al proyecto nacional de la revolución justicialista se institucionalizó constitucionalmente con los Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad y de la Educación y la Cultura; a ello le agregó "la función social de la

propiedad, el capital y la actividad económica", consagrando además la propiedad estatal de los recursos naturales, el monopolio estatal del comercio exterior, de los servicios públicos y de cualquier otra "actividad en salvaguardia de los intereses generales". El peronismo planteó constituir un nuevo país que lograra su efectiva independencia respecto de los centros imperialistas, para lo cual ofreció una alianza a toda la nación, entendiendo por tal a la totalidad de los argentinos. La oligarquía quedo comprendida dentro de la propuesta, no así los capitales imperialistas que imponían la independencia; solo que ahora la oligarquía debía conformase con ser un socio menor, políticamente minoritario y económicamente subordinado a la alianza de la burguesía industrial nacional y la clase trabajadora, bajo un Estado económicamente monopolista y hegemónico. La experiencia histórica nos ha demostrado, con graves perjuicios para el pueblo, que la unidad nacional no puede ser de todos los argentinos, no puede incluir a la oligarquía.

Desde 1955, cuando el contragolpe de la oligarquía derrocó al gobierno peronista, el país vive en inestabilidad política y sin ley constitucional. En efecto, la autodenominada "Revolución Libertadora", como la autodenominada "Revolución Argentina" y el presente autotitulado "Proceso de Reorganización Nacional", han ocupado el poder durante 16 años con estatutos provisionales a los cuales se subordina la Constitución, quedando de hecho anulada. A ello debemos sumarle que el tirano Aramburu anuló por un bando militar la Constitución de 1949, que la dictadura de Lanusse modificó por decreto la Constitución de 1853, etc. La última Ley Fundamental con vigencia constitucional es la de 1949; pero el hecho de que no rija desde 1955 sumado a la inestabilidad política y a 16 años de dictaduras militares, 7 años de gobiernos civiles surgidos de elecciones proscriptivas y apenas 3 años de gobierno civil surgido de elecciones libres en un total de 26 años, demuestra que en la actualidad los argentinos no tenemos una nación orgánicamente constituida.

Esta situación se origina en que en los últimos 40 años el país estuvo y aun está, sometido a una tenaz lucha entre tres agrupamientos sociales, cada unos de ellos con su propio proyecto y en defensa de sus intereses y del capital que considera de su propiedad. Tenemos por un lado las clases dominantes, es decir, la alianza oligárquico-imperialista, que componen las dos caras de la moneda de la dependencia: la oligarquía nativa como clase dominante no podría existir sin el sostén del capital imperialista

extranjero, pero este no podría penetrar en el país sin una clase nativa vendepatria que le abriera las puertas; esta es la esencia del neocolonialismo. El entrelazamiento político y económico de la oligarquía y el imperialismo nos da por resultado los grupos económicos oligárquicos, al margen de las empresas de puro capital extranjero. Ese gran capital tiene su propio proyecto de país, subordinado a los planes de división internacional del trabajo que elaboran los grandes capitales multinacionales en su propio beneficio.

Tenemos por otro lado la mayoría del pueblo argentino, que son los trabajadores asalariados, los desocupados, marginados y trabajadores por cuanta propia. Ellos son los dueños de la fuerza del trabajo y no es ocioso recordar que el trabajo existió antes de que existiera el capital, forma sencilla de ver que el capital no es mas que el fruto del trabajo acumulado durante generaciones. Cuando la fuerza política de los trabajadores expresada en el peronismo, a partir de 1945, impuso su presencia y sus derechos, los trabajadores dejaron de ser solamente propietarios de su fuerza laboral y comenzaron a acumular su propio capital bajo la forma de propiedad estatal; la gran diferencia entre el capital de los empresarios privados y el capital de los trabajadores de propiedad estatal es que este ultimo siempre coincide con la soberanía nacional. Es precisamente en la década del gobierno periodista que se acumula una enorme, raquitismo y poderoso capital el estado en los sectores claves de la economía.

Por ultimo, tenemos al tercer agrupamiento social constituido por el empresariado nacional, como genéricamente se lo denomina, y que abarca al pequeño y mediano capital agropecuario, industrial, comercial y financiero. Si bien estos sectores son previos al peronismo, no cabe ninguna duda que su gran expansión, sobre todo la de los industriales, se la deben a la política económica del peronismo, pese a que nunca lucharon políticamente a favor del mismo y en mas de una ocasión lucharon en su contra.

La lucha entre estos tres agrupamientos sociales se desarrolla alrededor de un eje determinante, que es el antagonismo absoluto entre el pueblo, o sea, los trabajadores asalariados, y la oligarquía. La lucha gira en torno a la propiedad del capital estatal, que es de los trabajadores aunque al servicio de toda la nación. Los trabajadores son políticamente nacionalizadores y sus intereses en el gobierno significan aumentar la acumulación

del capital en el Estado defendiendo al mismo tiempo la soberanía nacional. En cambio la oligarquía es políticamente vendepatria por eso sus intereses en el gobierno significan privatizar las empresas del Estado. ¿Quién compra las empresas estatales que privatizan las dictaduras militares?: los capitales oligárquicos-imperialistas. Así se demuestra como bajo el argumento técnico de combatir la inflación, la oligarquía le roba a mano armada (armada de fusiles, tanques, aviones y submarinos) a los trabajadores, un capital que es propiedad de ellos y fruto de la acumulación de su trabajo durante generaciones.

La fuerza económica, social y política de estos tres agrupamientos en lucha de ninguna manera es igual. La alianza oligárquica-imperialista posee un gran capital altamente concentrado en su propiedad; es una minoría social insignificante que aun contando a todos aquellos que pudiera arrastrar detrás de sus objetivos con diversas formas de compromisos, sobornos y engaños apenas supera el 15% en una contienda electoral libre: su presencia en el poder durante largos años desde 1930 hasta el presente solo ha sido posible mediante el manipuleo de las fuerzas armadas de la nación a su servicio exclusivo, instaurando dictaduras militares cada vez más criminales. El empresariado nacional posee un capital pequeño y mediano de escasa composición orgánica y muy baja concentración; su fuerza social, incluyendo a sectores de las capas medias que sin ser empresarios se mueven con sus pautas sociales y políticas, escasamente llega al 25%, razón por la cual su presencia hegemónica en el gobierno solo se hace posible por medio de regímenes aparentemente democráticos pero surgidos en la práctica de la proscripción política de la fuerza popular mayoritaria, o sea, el peronismo. El pueblo, con la clase trabajadora, como su columna vertebral y vanguardia social en las luchas, posee la más formidable fuerza económica, base de toda la producción, que es la fuerza del trabajo; a ello se suma su efectiva propiedad sobre el capital estatal puesto al servicio de toda la sociedad, que es un capital enorme y poderoso a la vez que es diversificado y dedicado en gran parte a los sectores claves de la economía. Si hoy ese capital se ve disminuido por las llamadas privatizaciones practicadas por la dictadura oligárquica, debe quedar claro que se trata de un robo que será debidamente reparado cuando el Estado recupere su propiedad sobre las empresas en un futuro no muy lejano. La fuerza social del pueblo es mayoría absoluta dentro de la nación, ya que constituye el 60% y su fuerza política se deriva de que la inmensa mayoría del pueblo

posee una identidad política unificadora, como es el peronismo, o sea que el pueblo tiene la fuerza política de la democracia por su propia naturaleza mayoritaria. Su desalojo del gobierno o su proscripción se ha debido simplemente a la imposición tiránica de la fuerza de las armas en manos de la minoría.

¿Cómo juega el tercero en discordia en esta lucha?. El comportamiento del empresariado nacional durante por lo menos los últimos 40 años ha sido ambivalente y cambiante y puede decirse que es su comportamiento el que ha venido desequilibrando la balanza según se alió al pueblo constituyendo una alianza frentista nacional y popular, la correlación se volvió totalmente desfavorable para la alianza oligárquico-imperialista y entonces tuvimos gobiernos populares defensores del capital estatal y de la industria nacional. Pero como no se aniquilaba a la oligarquía , al tiempo el gobierno se enterraba en una crisis económica; en ese momento el empresariado nacional rompía la alianza por considerar que se reducían sus márgenes de utilidades, creyendo que en ese acuerdo con los grupos económicos oligárquicos contra los trabajadores tendría un futuro provechoso. Cuando esto sucedió tuvimos gobiernos de dictaduras militares.

Sin embargo, esa alianza antipopular y antinacional, solo es un engaño habilidoso de la oligarquía a expensas de la ingenuidad del empresariado nacional. Al poco tiempo se rompe, porque la política oligárquica no consiste simplemente en "controlar los excesos sindicales" o "combatir la corrupción o la subversión", sino que consiste en destruir el mercado interno, reduciéndolo drásticamente, privilegiando un mercado de artículos suntuarios para los sectores de altos ingresos, favoreciendo las importaciones de todo tipo y promoviendo las exportaciones que convienen al capital de sus grupos económicos y a los intereses de sus socios imperialistas en el mercado mundial. El gran capital de los grupos económicos oligárquicos tiene la tendencia natural de aumentar su poder por medio de la mayor concentración del capital en sus manos y esto lo realiza tanto por la privatización de las empresas estatales como por la quiebra del capital de los empresarios nacionales, llevando a la quiebra la pequeña y mediana industria y desalojando de sus tierras a los pequeños y medianos productores agrarios. Cuando esta alianza se rompe y el sector de los empresarios nacionales retorna a la alianza con el pueblo, la crisis política resquebraja la aparente dureza del poder de las dictaduras militares. Esta historia se viene repitiendo cíclicamente desde los orígenes del

peronismo hasta hoy, solo que el saldo que va dejando a través de la inestabilidad política, la ausencia de continuidad en planes de desarrollo económico y social de largo plazo, el periódico y cada vez más cruento derramamiento de sangre, etc., es un saldo negativo para la nación como tal, de estancamiento primero, de retroceso en la actualidad y, de seguir así la historia durante los próximos veinte años, tendremos al final la desintegración nacional, inclusive territorialmente. Debemos tener la más clara consciencia que es este y no otro el final en caso de mantenerse indefinidamente el enfrentamiento entre estos tres agrupamientos sociales sin que nadie se imponga definitivamente.

¿Cabe plantearse acaso la supresión de la lucha sin suprimir a ninguno de los tres capitales involucrados en ella?. Eso seria supuestamente la unidad nacional sin distinciones de ninguna especie. Hemos oído muchas veces ese canto de sirena. Ya hemos visto que allí estuvo el error esencial del pacto constituyente de 1949. La oligarquía, cuando se ve perdida, negocia cualquier cosa con tal de que la otra parte se comprometa a no expropiarle el capital; posteriormente, con la fuerza de ese mismo capital hostiga con el desabastecimiento y reduce las exportaciones; al final, suprime por una proclama militar firmada por un tirano la totalidad de la Constitución. Volvieron a repetir esa táctica en 1973, retirándose solamente para preparar una contraofensiva más sangrienta.

La única manera de resolver definitivamente esta lucha desintegradora por lo desangrante es la alianza de dos con el fin de hacer desaparecer definitivamente al tercero. Obviamente la alianza del pueblo con la oligarquía en contra del empresariado nacional es absurda. La alianza del empresariado nacional con la oligarquía, además de antinacional y antidemocrática es inconducente según lo ha demostrado ya la historia. La razón de ello es que en esa alianza va a buscar un aumento en la tasa de explotación de la mano de obra, pero obviamente no le interesa la destrucción total de esos mismos trabajadores que son mano de obra y mercado consumidor. En cambio la oligarquía utiliza la alianza con los empresarios nacionales al solo efecto de reunir la fuerza suficiente para derrocar a los gobiernos populares, pero luego se quita la careta y demuestra que sus intenciones son obtener un país de no más de 15 millones de habitantes, o sea que debe destruir al pueblo expulsando de la sociedad y del país a nada menos que 13 millones de habitantes. Un proyecto semejante no deja lugar, naturalmente,

para la existencia del empresariado nacional; pero ha sido siempre la heroica resistencia obrera y popular la que ha detenido el avance de las ofensivas oligárquicas. La única alianza natural, en la que convergen los intereses económicos a largo plazo es la del pueblo con el empresariado nacional con el fin de aniquilar a la oligarquía, con lo cual se deja sin base social de sustentación a los capitales extranjeros capitalistas.

¿Por qué no ha ocurrido eso hasta ahora si ya esa alianza se hizo en mas de una ocasión?. Por lo mismo que ya hemos dicho: hasta ahora nunca se realizo una Alianza Constituyente entre el pueblo y el empresariado nacional con el fin de construir una Nueva Argentina SIN OLIGARQUIA.

Habitualmente los empresarios nacionales le tienen miedo a una alianza en la que avance seriamente un plan de nacionalizaciones porque suponen que esa "violación de la propiedad privada" puede después descargarse sobre ellos mismos. Nosotros creemos que en la medida que no se expliciten debidamente las intenciones programáticas de todos los eventuales participantes de una alianza es natural que todos desconfíen de las intenciones ulteriores de todos. De acuerdo con el decir popular "cuentas claras conservan la amistad".

Proponer la eliminación definitiva del agrupamiento social oligárquico-imperialista constituye indudablemente una revolución, cuyo carácter es simultáneamente nacional y social. No se puede realizar una revolución en nuestro con la ingenuidad infantil de proponer alianzas tácticas con la mal disimulada intención de enfrentar posteriormente al aliado. No creemos en el engaño como base de la política en el marco de un país culturalmente maduro. Creemos si en la negociación capaz de armonizar intereses comunes, capaz de poner limites y garantías para la defensa de los intereses y de los legítimos derechos de cada uno; creemos en la alianza estratégica sobre la base de un pacto de mutua conveniencia, tanto por satisfacer la mayor parte de las aspiraciones sectoriales como por garantizar el logro de todas las aspiraciones comunes al conjunto. Todo ello debe realizarse partiendo de la autentica aceptación de la democracia, cuyo problema básico no ha sido el cacareado problema de la supuesta falta de respeto por las minorías, verdadero cinismo de los vendepatrias, sino el respeto a las mayorías, quienes tiene el derecho sagrado de gobernar partiendo del principio de que el único

soberano en una República es el pueblo mismo.

Por eso es que proponemos una ALIANZA CONSTITUYENTE para una NUEVA ARGENTINA SOCIALMENTE JUSTA ECONOMICAMENTE LIBRE Y POLITICAMENTE SOBERANA, MILITARMENTE EN PAZ E INTERNACIONALMENTE SOLIDARIA.

Pensar un país sin oligarquía y sin dependencia del imperialismo implica elaborar y pactar un Proyecto Nacional de largo alcance. No se trata en primera instancia de convocar a elecciones para una Convención Constituyente que le haga reformas a la Ley Fundamental preexistente. Se trata de pactar un proyecto socioeconómico para la realización de los intereses de las fuerzas constituyentes de la Nación. La superestructura jurídico-política nace de y obedece al proyecto social y económico para la salvaguarda de los derechos y garantías pactados y para la mayor eficiencia posible en la administración. Por eso hoy, al presentar nuestra proposición para las BASES de la ALIANZA CONSTITUYENTE, lo hacemos poniendo especial énfasis en los aspectos económicos y sociales. Si el frente nacional y popular acuerda un pacto sobre la armonización de los respectivos intereses económicos, no nos será difícil acordar luego las instituciones políticas partiendo del principio de la Soberanía Popular en un régimen republicano, representativo y federal con pluralismo político y democracia social. Por el contrario, de nada nos valdrá acordar simplemente en la defensa de la democracia en abstracto si al día siguiente de que caiga la dictadura se inicia una nueva guerra civil para imponer proyectos económicos diferentes o para burlar la voluntad de las mayorías populares; la oligarquía contragolpeara una vez más.

Un Proyecto Nacional de desarrollo económico-social, en el mundo actual, carece de sentido como proyecto autárquico; presupone por lo tanto una previsión sobre su inserción internacional. Aquí una vez mas lo determinante es buscar con quienes tenemos intereses económicos y sociales comunes. En el Cono Sur enfrentamos proyectos reaccionarios esencialmente idénticos, basados en la doctrina de seguridad nacional para imponer en lo económico a la escuela de Chicago, teoría económica al servicio del gran capital financiero internacional. Además afrontamos el mismo problema en cuanto a la estrechez de nuestros respectivos mercados internos, problema mucho más grave en algunos de nuestros vecinos, y tenemos en común la proximidad geográfica con recursos naturales

que, en el conjunto del Cono Sur, son complementarios. En América Latina compartimos con nuestros pueblos hermanos los anhelos de integración fundados en razones histórico-culturales y en innegables ventajas económicas que redundarían en mayor capacidad de decisión política soberana en el concierto internacional para el siglo venidero; un mercado común latinoamericano es el mínimo al que debemos aspirar y por el que debemos luchar. En el conjunto del Tercer Mundo compartimos la necesidad del desarrollo, de romper él deteriore de los términos de intercambio y de resolver definitivamente el gravísimo problema de la dependencia financiera; no es impensable entonces que en el marco del Movimiento de Piases No Alineados y del dialogo Norte-Sur resolvamos nuestra propia deuda externa derivando su pago renegociado hacia un fondo común de desarrollo para el tercer mundo.

Basamos nuestra proposición programática para una ALIANZA CONSTITUYENTE DE LA NUEVA ARGENTINA en la interpretación histórica de nuestro desarrollo económico porque entendemos que de allí surge la comprensión cabal de nuestros problemas y consecuentemente su solución. De todas maneras, es bien posible que no exista coincidencia plena al respecto entre las diversas expresiones sociales y políticas del frente nacional y popular. No es lo determinante. Lo básico, lo efectivamente constituyente de un Proyecto Nacional es pactar el futuro.
El oprobioso estado de miseria, injusticia y destrucción nacional a que nos ha conducido la tiranía oligárquico-militar nos exige imperiosamente una solución definitiva. La constitución del Frente Nacional y Popular con un Proyecto Nacional definido y una estrategia de conquista del poder clara basada en la movilización popular activa es un deber histórico que nadie puede rehuir. Al presentar estas Bases de ninguna forma lo hacemos con criterio dogmático ni pretendiendo poseer verdades reveladas. Son bases mínimas suficientes para acordar un pacto histórico y materializar sólidamente la ALIANZA CONSTITUYENTE. La dirigimos, en primer lugar, a las bases sociales del pueblo y del empresariado nacional por cuanto allí reside la soberanía sobre todas las cosas; en segundo lugar las dirigimos a las organizaciones gremiales y partidos políticos ya que son quienes deberían actuar en calidad de representantes de aquellas bases sociales. No se nos escapa que existe en la Argentina de hoy una crisis de representatividad. Si los actuales dirigentes gremiales y políticos obran consecuentemente en la defensa de los intereses presentes y futuros de sus bases

sociales harán más fácil la resolución de todos los dramas actuales. En caso contrario, nos consta la existencia de un segundo nivel de dirigentes en todos los organismos gremiales y políticos y no dudamos de la capacidad de expresión y presión desde las bases soberanas; ello conducirá de todas maneras, aunque por caminos más largos y tal vez más penosos, a un mismo final de unidad nacional antioligárquica y antiimperialista.

Enfrentamos dramáticamente la opción de LIBERACION O DEPENDENCIA del mismo modo en que para el conjunto latinoamericano se hace dirá la sentencia del General Perón de que "el año 2000 nos encontrara unidos o dominados". Si no somos capaces de imponer la LIBERACION, ese año 2000 encontrara a nuestra región destruida y quizás desintegrada. Ninguna sociedad se ha suicidado en la historia. El pueblo y la nación argentina serán por cierto la excepción. Por eso es que luchamos sin limites de heroísmo sabiendo que lo que dijera la compañera Eva Peron, "la patria dejara de ser colonia o la bandera flameara sobre sus ruinas", solo habrá de concluir con la LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL.

México,12deenerode1982
MarioEduardoFirmenich
SecretarioGeneral
Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero